

CONSTANCIA SECRETARIAL: En la fecha me permito dejar constancia que me comuniqué al número telefónico de la agente oficiosa del actor, con el fin de notificarle la admisión de tutela de la referencia, por cuanto el correo electrónico enviado rebotó. A su vez, averigüé por el cumplimiento de la medida previa decretada en el presente asunto y el estado de salud del accionante, informándome que tal como lo informó la EPS su hermano fue estabilizado y dado de alta, se encuentra tomando los medicamentos que le fueron prescritos, pero tiene pendiente dirigirse a la entidad prestadora de servicios para la autorización de las remisiones a consulta por medicina interna que fueron envidadas por el médico tratante.

29 de abril de 2021.

JULIANA CASTAÑO BOTERO
OFICIAL MAYOR

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

2021-00227

SENTENCIA DE TUTELA 66

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por LUISA FERNANDA JIMENEZ GUTIERREZ en calidad de agente oficiosa del señor DIEGO ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ en contra de **ASMET SALUD EPS** por la presunta vulneración de su derecho a la salud.

II. ANTECEDENTES

Informó la agente oficiosa, que su hermano Diego Andrés se encuentra afiliado a la EPS accionada a través del régimen subsidiado; presenta un diagnóstico de *“Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH POSITIVO)”*.

Para la fecha de interposición de la acción, se encontraba hospitalizado en Assbasalud del barrio la Enea de esta ciudad, por sospechas de *neuroinfección*, motivo por el cual su medico tratante lo remitió a valoración por medicina interna y de manera prioritaria los estudios de *neuroimagen* para descartar el diagnostico.

Para ello le manifestaron en Assbasalud que su hermano debía ser remitido a un hospital de tercer nivel para la atención correspondiente, no obstante, pese a las diligencias de la IPS para la remisión ninguna clínica de tercer nivel quiso aceptar el traslado por su condición de VIH POSITIVO.

III. PRUEBAS

Aportadas por la parte accionante

- Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.
- Copia de la historia clínica y ordenes medicas.

IV. PRETENSIONES

Se pretende con esta acción se tutelen los derechos fundamentales invocados y se ordene:

“... a una CLINICA U HOSPITAL DE TERCER NIVEL en cabeza de su representante legal o por quien haga sus veces que de forma urgente y para evitar un perjuicio mayor, de manera inmediata AUTORICEY MATERIALICE la REMISION de mi hermano DIEGO ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ, para que le realicen el examen NEUROIMAGE Y ESTUDIOS EN TERCER NIVEL PARA DESCARTAR NEUROINFECCION y lo pueda ver el ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA.

TERCERO:ORDENAR a ASMETSALUD EPS, o a quien corresponda en el marco de sus competencias GARANTIZAR de manera oportuna, eficiente el TRATAMIENTO INTEGRAL y/o procedimientos que hubiese lugar en adelante a razón del diagnóstico de mi hermano DIEGO ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ, incluyendo exámenes, citas médicas con especialistas y médico general, terapias, hospitalización, procedimientos pre-quirúrgicos, pos-quirúrgicos, además, desplazamientos fuera de la ciudad que llegare a requerir dentro y fuera del POS.”

V. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto calendado de 20 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela. Se decretaron las pruebas presentadas por la parte actora, se dispuso la vinculación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la E.S.E Assbasalud, realizándose las respectivas notificaciones tanto a las entidades accionadas como vinculadas, haciéndoseles saber que debían presentar el informe respectivo dando respuesta al escrito de tutela y presentando las pruebas que pretendieran hacer valer.

También se decretó como medida previa, para salvaguardar la vida del actor, ubicar de manera inmediata al accionante en un hospital de tercer nivel donde tengan contrato vigente en esta ciudad. De igual modo, se ordenó a la IPS Assbasalud, que en caso de verse deteriorado el estado de salud del paciente de modo tal que se ponga en riesgo su vida, procediera con la remisión en calidad de urgencia vital ante la entidad medica mas cercana que cuente con los requerimientos clínicos que necesite el paciente.

VI. INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS

ASMETSALUD EPS manifestó:

“... Sobre el particular es menester indicar que por parte de esta Entidad se han desplegado todas y cada una de las gestiones administrativas tendientes a la satisfacción y protección de los derechos fundamentales del usuario, es por ello que respecto de los asuntos que atañen directamente con la acción de tutela se indica lo siguiente:

*1. Se realizó múltiples solicitudes a diferentes IPS de tercer nivel con el fin de que se recibiera al usuario DIEGO ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ, no obstante, no se recibió respuesta positiva en razón **por la situación actual de pandemia por el virus COVID 19 no hay disponibilidad de camas**, lo que ha generado **saturación** en el servicio de salud requerido. (según constan en la bitácora de referencia anexa)*

*2. El día 24 de abril de 2021 se da de alta médica de la IPS ASSBASALUD, toda vez que según **criterio médico** el afiliado puede continuar **tratamiento de manera ambulatoria**, tal como consta en la historia clínica anexa...”*

En virtud de lo anterior, afirman que la EPS ha cumplido con sus obligaciones para garantizar el tratamiento del paciente, sin que se le hubiere negado ningún servicio. Por lo tanto, solicitan no tutelar los derechos fundamentales del actor ni conceder tratamiento integral, pues se le han suministrado todos los servicios que requiere y no se pueden

reconocer unos hechos futuros e inciertos.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS indicó que el insumo pedido se encuentran incluidos dentro del PBS y por lo tanto debe ser la entidad de salud a la cual se encuentra afiliada la accionante quien preste los servicios requeridos; en consecuencia solicita que se desestimen las pretensiones frente a ellos.

ASSBASALUD fue notificado el 20 de abril de 2021 a través de su correo electrónico (archivo 05 expediente digital), no obstante, guardó silencio frente al particular.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a este Juzgado determinar si la conducta asumida por la entidad accionada o las vinculadas, vulnera los derechos constitucionales invocados por la parte actora al demorar la materialización del servicio médico o por el contrario opera la figura del hecho superado. Para ello se analizará el derecho a la salud como prerrogativa fundamental y las implicaciones cuando existe demora en la prestación de los servicios, así como la carencia actual de objeto.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede este funcionario Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VIII. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Este Juzgado la tiene para tramitar y fallar la acción incoada, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en el cual se asigna su conocimiento a todos los Jueces de la República, sin determinar competencia territorial de manera exclusiva, salvo el lugar donde ocurre la vulneración del Derecho.

LEGITIMACIÓN

POR ACTIVA la ostenta la accionante, al invocar la protección constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591.

POR PASIVA radica en cabeza de la entidad accionada y las vinculadas, de las cuales predica la vulneración de derechos confutados.

SOBRE LA ACCIÓN DE TUTELA.

La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo procesal específico y directo que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una situación jurídica determinada cuando éstos sean vulnerados o se presente amenaza de su violación.

Es un medio específico porque se contrae a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados, de modo actual e inminente y conduce, previa la solicitud, a una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento.

Además es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaría a la que el afectado sólo puede acudir en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial.

“La acción de tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, con el fin de que en su caso, consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.”

NATURALEZA FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA SALUD.

En lo tocante al derecho a la **SALUD** de naturaleza fundamental, indica el Art. 2 de la Ley 1751 de 2015:

“...El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado....”

Para lo cual es imprescindible iniciar con los cuidados y atenciones básicas requeridas de manera integral hasta alcanzar el pleno restablecimiento de la salud del paciente, o, por lo menos, adoptar las medidas médicas necesarias para mitigar los síntomas.

Por consiguiente, la base para el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad se ha sustentado en el derecho a la salud, de rango constitucional y fundamental, como pilar esencial en el ordenamiento jurídico colombiano.

De importancia preponderante, tal como lo sostiene la sentencia T- 760 de 2008

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna. A continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los términos en que ha sido consignada por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y la jurisprudencia.”

El derecho a la salud, como reiteradamente¹ lo ha manifestado la Corte Superior, es “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser” abarca de este modo el mantenimiento y el restablecimiento de las condiciones esenciales del ser humano en condiciones dignas.

La salud es esencial en el desarrollo del individuo, puesto que el padecimiento de una enfermedad puede ser una “limitante para desempeñar alguna función productiva o ser un impedimento para desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano”²,

¹ Consultar, entre otras sentencias, las tutelas T- 597-93, T-1218-04, T-361-07, T-407-08

² T-926-99, T-407-08

restringiendo su autonomía, su libertad de elegir profesión, oficio, o llegando a afectar el desarrollo de su personalidad.

El derecho a la salud es catalogado como derecho fundamental por la Ley 1751 de 2015, en la misma normatividad se ha indicado que el Estado es el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de este derecho.

Finalmente se debe indicar que cuando los trámites son excesivos e injustificados, no solo pueden implicar que se extienda el tiempo de sufrimiento por las dolencias del paciente, sino también un detrimento en su salud e incluso su muerte, por ende, constituyen una violación al derecho fundamental a la salud, a la vida e incluso a la dignidad humana.

CONTINUIDAD EN EL TRATAMIENTO.

En la Sentencia T-124 de 2016 la Corte ha reiterado en relación al principio de continuidad en la prestación del servicio de salud:

“... El principio de continuidad, según el numeral 3.21 del artículo 153 de la Ley 100 de 1993, consiste en que “toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad”.

Dicho principio, hace parte de las responsabilidades a cargo del Estado y de los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud, debiendo facilitar su acceso con los servicios de promoción, protección y recuperación, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad señalados en el artículo 49 de la Constitución Política de 1991.

Al respecto, la Corte ha venido reiterando los criterios que deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud – EPS, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud sobre tratamientos médicos ya iniciados, de la siguiente manera:

“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”.

Adicionalmente, la prestación del servicio de salud debe darse de forma continua, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los usuarios del sistema de seguridad social en salud deben recibir la atención de manera completa, según lo prescrito por el médico tratante, en consideración al principio de integralidad, es decir, deben recibir *“todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”.*

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado y los particulares comprometidos con la prestación de servicios de salud deben facilitar su acceso conforme a principios como el de continuidad e integralidad. A la luz de los postulados jurisprudenciales de la Corte, la prestación del servicio de salud implica que se debe dar de manera eficaz, regular, continua y de calidad. Por tanto, las EPS no pueden omitir la prestación de los servicios de salud que supongan

la interrupción de los tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos.

Lo anterior obedece al principio de la buena fe y a la obligación de garantía del Estado consistente en evitar situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales de la vida, la salud, integridad personal o la dignidad de los usuarios de los servicios médicos.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a la impartición de una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantar los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio pan evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*³.

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*⁴, en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento de/juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*⁵.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

"De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente"

*En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta **se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional,***

³T-011 de 2016.

⁴T-970 de 2014.

⁵T-168 de 2008.

desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario.” (Negrillas Propias.)

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.” (Negrillas propias.)

IX. CASO CONCRETO

Con el presente asunto, el accionante pretendía se tutelaran los derechos fundamentales incoados y se ordenara a la entidad accionada remitirlo a un hospital de tercer nivel para continuar con el tratamiento médico prescrito en su hospitalización, así como el suministro de una atención integral para su diagnóstico VIH/SIDA.

Sobre las pretensiones la EPS accionada se pronunció e indicó que el actor ya había sido dado de alta el pasado 24 de abril de 2021, con manejo ambulatorio y le fueron garantizados todos los servicios médicos prescritos.

De las pruebas aportadas al plenario se determina lo siguiente:

El señor Diego Andrés se encuentra afiliado a la EPS Asmetsalud a través del régimen subsidiado; se encontraba hospitalizado en la E.S.E Assbasalud para la fecha de la interposición de la acción de tutela y había sido remitido de manera prioritaria a atención de tercer nivel, con el fin de realizarle unos estudios y descartar posible **NEUROINFECCIÓN**; pese a la remisión efectuada, debido a la alta ocupación de los hospitales de tercer nivel por temas de la pandemia nacional, no fue recibido en ninguno de ellos. También fue ordenada una valoración prioritaria por parte de la especialidad de medicina interna.

En virtud de lo anterior, se decretó como medida provisional, para salvaguardar la vida del paciente, ordenar a la EPS realizar una remisión inmediata a una entidad de tercer nivel que se encuentre dentro de su red prestadora. De igual modo, se ordenó a la E.S.E Assbasalud, que en caso de verse deteriorado el estado de salud del paciente de modo tal que se ponga en riesgo su vida, procediera con la remisión en calidad de urgencia vital ante la entidad médica más cercana que contara con los requerimientos clínicos que necesite.

Encontrándose en trámite esta acción constitucional, el señor Jiménez Gutiérrez fue encontrado **“CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE CON DELIRIUM RESUELTO, SIN SIGNOS DE COMPLICACION NEUROLOGICA”** por lo que fue dado de alta médica con manejo ambulatorio por parte de Assbasalud.

En comunicación telefónica con la agente oficiosa del accionante, confirmó que su hermano fue estabilizado y dado de alta, se encuentra tomando los medicamentos que le fueron prescritos, pero tiene pendiente la consulta por medicina interna que fue envidada por el médico tratante para dar continuidad al tratamiento.

Frente al particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en abundante jurisprudencia sobre la protección de las garantías constitucionales de quienes padecen VIH. Al respecto y teniendo en cuenta las características específicas de esta enfermedad y sus nefastas

consecuencias, esta Corporación ha señalado “(i) que el portador de VIH requiere una atención reforzada por parte del Estado, (ii) que no solo tiene los mismos derechos de las demás personas, sino que las autoridades están en la obligación de ofrecerle una protección especial con el propósito de defender su dignidad y evitar que sean objeto de discriminación, y (iii) que su situación particular representa unas condiciones de debilidad manifiesta que lo hacen merecedor de una protección constitucional reforzada. Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el especial tratamiento que se debe tener con estas personas, en ámbitos como la salud, el trabajo y la seguridad social, entre otros”.

También la alta corporación al referirse a servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud ha dicho que su negación, demora u omisión, implica por parte de la entidad competente una clara amenaza de los derechos fundamentales y en ese sentido la afectación de la salud se convierte en prerrogativa de primer orden.

Bajo ese entendido cualquier demora en la prestación de los servicios afecta de manera directa el estado de salud de los usuarios y de paso atenta contra el principio de dignidad en cabeza de cada persona, bien sea porque se fundamenten en dificultades de orden técnico o administrativo u obedezcan a situaciones ajenas a la EPS como la exagerada demanda del servicio frente a una limitada oferta.

En casos como el que se estudia la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse al considerar que cualquier demora en la prestación de los servicios de salud, vulnera los derechos de las personas porque los somete a situaciones indignas que van en detrimento de su integridad física, tras la excusa de existir impedimentos administrativos por lo regular relacionados con sistemas de contratación ineficientes.⁶

El anterior argumento es suficiente para conceptuar que ante la dilación en la materialización de los servicios se está poniendo en riesgo la salud de la paciente, habida cuenta que la efectividad depende también de la premura con que se atienda la contingencia.

Para el caso en estudio, pese a que el accionante fue dado de alta médica, no le han realizado la valoración por medicina interna, la cual fue prescrita de manera prioritaria por el galeno que lo trató durante la hospitalización, tal como se evidencia en la historia clínica adjunta al proceso.

La EPS, pese a hacer un esfuerzo argumentativo en indicar que el paciente había sido dado de alta y le habían garantizado la continuidad del tratamiento, no demostró que ya hubiese programado y materializado la valoración por medicina interna, a sabiendas que según la jurisprudencia constitucional, una vez el médico tratante ordena un servicio de salud, este requerimiento se convierte en fundamental para la persona en aras de recuperar su salud y realización debe ser inmediata conforme el principio de integralidad; la sola autorización del servicio no indica cumplimiento del mismo, debe la EPS realizar ante la IPS con la que tenga contratación vigente todas las acciones pertinentes a fin de lograr la materialización de los servicios médicos, por lo tanto la EPS sigue vulnerando su derecho a recibir la atención adecuada en salud para restablecerse y poder gozar de sus demás derechos fundamentales.

En ese orden, es responsabilidad de la EPS según la ley y la amplia jurisprudencia de la H. Corte Constitucional garantizar la continuidad del tratamiento con alguna entidad de su red prestadora de servicios en salud quien programe de inmediato la realización de la consulta, máxime cuando el usuario es un sujeto de especial protección constitucional.

⁶ Sentencia T-027 de 1999. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Meza

Lo anterior, en procura de garantizarle a la actora su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la integridad personal, debiendo la E.P.S accionada realizar el acompañamiento correspondiente y las gestiones o trámites administrativos que están obstaculizando la efectividad del servicio de salud en este caso.

En ese orden, se concederá la tutela para la protección del derecho a la salud y se ordenará a ASMETSALUD EPS **AUTORIZAR, PROGRAMAR Y REALIZAR** de manera inmediata la **VALORACIÓN POR LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA** ordenada por el profesional tratante al accionante.

Frente a la pretensión de ordenar la atención y hospitalización de tercer nivel al accionante según la remisión que se efectuó por Assbasalud, esta Juez Constitucional determina, que si bien es cierto existió una transgresión que en primicia generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir por la estabilización del paciente, su alta hospitalaria y el manejo médico ambulatorio y en tal sentido se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a dicha pretensión.

Finalmente, se concederá un tratamiento integral al accionante respecto de la patología que le aqueja *“Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH POSITIVO)”*, en el sentido de que se otorguen todos los servicios médicos que sean prescritos sin dilaciones injustificadas por la empresa accionada, pues ya fue sometido a un riesgo con la demora la no atención hospitalaria de tercer nivel y ello no puede volver a suceder máxime con la especial protección que ostenta por el diagnóstico considerado como enfermedad catastrófica, en virtud al artículo 8 de la Ley 1751 de 2015, que define la Integralidad indica de manera taxativa la imposibilidad de las EPS de fragmentar la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario, entendiendo que un servicio o tecnología de salud comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada.

El principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos elementos: *“(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”⁷*.

En consecuencia, la materialización del principio de integralidad conlleva a que toda prestación del servicio se realice de manera *oportuna, eficiente y con calidad*; de lo contrario se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud.

Por último, se ordenará **DESVINCULAR** del presente trámite constitucional a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la E.S.E Assbasalud, por cuanto la responsabilidad de prestar los servicios de salud y garantizar su continuidad es exclusiva de la EPS a la cual se encuentra afiliado el accionante.

Por lo dicho, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la **SALUD** de **DIEGO ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ** en contra de **ASMET SALUD EPS**.

⁷ Corte Constitucional, Sentencias T-103 de 2009 y T-022 de 2011

SEGUNDO: ORDENAR a ASMETSALUD EPS AUTORIZAR, PROGRAMAR Y REALIZAR de manera inmediata la **VALORACIÓN POR LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA** ordenada por el profesional tratante al accionante.

TERCERO: ORDENAR a ASMETSALUD EPS dentro del marco de su competencia legal, garantice una atención integral en salud, en forma oportuna y sin ningún tipo de interrupciones respecto del diagnóstico que aqueja a la accionante denominado **“ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH POSITIVO)”**, entiéndase consultas médicas, exámenes, control de resultados, procedimientos quirúrgicos, suministro de medicamentos, hospitalización, vacunas, cirugías, procedimientos pre quirúrgicos, posquirúrgicos y demás tratamientos con cubrimiento del 100% que se encuentren dentro y fuera del PBS, de modo que le brinde una adecuada recuperación, conforme a las prescripciones que los médicos adscritos a la entidad accionada efectúen para tal fin.

CUARTO: NEGAR la PRETENSIÓN de que se ordene la atención y hospitalización de tercer nivel al accionante por tratarse de **UN HECHO SUPERADO**.

QUINTO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** y la **E.S.E ASSBASALUD**.

SEXTO: ADVERTIR a la parte accionada que el incumplimiento lo aquí dispuesto la hará acreedora a las sanciones dispuestas en los artículos 52 y 53 Del Decreto 2591.

SÉPTIMO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

OCTAVO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac70675044321ca8f3766a4df4bae25ef4a1f6716f40961460d6f59f189a6dda**
Documento generado en 30/04/2021 04:56:46 PM